

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Doña María Sandra Julià Julià, Diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que se solicita respuesta por escrito, sobre la situación de las desaladoras en Orpesa/Oropesa del Mar y Moncofa en la provincia de Castellón.

Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2016

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las plantas desaladoras de Orpesa y Moncofa, en Castellón, se han convertido en un verdadero problema económico. Ambas se proyectaron con la previsión de que en 2009 estarían a pleno rendimiento para abastecer de agua a una población futura prevista en tiempos del "boom" inmobiliario. Los municipios que iban a beneficiarse contaban entonces con una proyección importante de turistas en verano, y grandes proyectos urbanísticos que han derivado en edificios abandonados a mitad construcción o sin vender y al menos a cinco planes de campos de golf u otras alternativas de ocio que nunca verán la luz.

Aun así, el Gobierno quiere ponerlas en marcha este año para no perder las ayudas europeas recibidas. La misma previsión la hacían desde Acuamed, el organismo del Ministerio de Medio Ambiente responsable de estos proyectos. Según indicaron, el plazo para activarlas y no tener que devolver los fondos europeos acababa a finales de año, por lo que no habría ningún riesgo.

Desde la Comisión Europea han indicado, por su parte, que el límite es el 31 de marzo de 2017. Si en esa fecha no están en uso, "la Comisión procederá a la recuperación de los fondos". Queda poco tiempo para resolver el problema al que se enfrentan los cinco Ayuntamientos que en su día firmaron el convenio para abastecerse con el agua desalada: Orpesa, Cabanes, Benicàssim, Moncofa y Xilxes.

Todos los consistorios deben devolver en 25 años el coste de la obra (104,5 millones las dos plantas) excepto lo subvencionado por Europa, así como el coste de explotación. Costes sobrevalorados y no claros, desde el punto de vista de los municipios y de todos los ciudadanos que viven en ellos, que se enfrentan a no poder pagar los costes de la construcción y lo que es peor, a no poder pagar las facturas del suministro de agua, un bien que debería de ser público y básico.

Moncofa es, junto con Orpesa y Cabanes, uno de los municipios de los que tenían mayor proyección urbanística. La desaladora garantizaba en esta estimación de crecimiento urbanístico el abastecimiento para uso urbano. Ahora, con viviendas vacías y PAI's sin construir o paralizados, la planta es innecesaria y ha dejado de tener sentido.

Teniendo presente lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué revisión está llevando a cabo el Gobierno respecto de los costes de los proyectos de las desaladoras de Orpesa/Oropesa del Mar y Moncofa realizados por la empresa Acuamed?
2. ¿Qué coste de amortización y explotación real existe en estas plantas desaladoras?
3. Teniendo en cuenta que el aprovechamiento de estas plantas desaladoras ha perdido interés ante los cambios en las perspectivas de crecimiento urbanístico de la zona, ¿considera el Gobierno que los posibles sobrecostes de las mismas deben ser sufragados por todos los ciudadanos? ¿valora impulsar la exigencia de algún tipo de responsabilidad por alcance?
4. ¿Cuándo empezará la renegociación de los convenios correspondientes a dichas plantas desaladoras? ¿qué objetivos persigue el Gobierno con dicha renegociación?
5. ¿Qué fórmula "sostenible" de pago, teniendo en cuenta que las actuales cifras son "inasumibles", va a proponer el Gobierno a los municipios a los que se suponía iban a abastecer estas plantas desaladoras?
6. ¿A qué precio finalmente tendrán que pagar por el litro de agua los ciudadanos afectados?
7. ¿Ha valorado el Gobierno la posibilidad de que estas plantas desaladoras pudieran utilizarse como estructuras de apoyo en el suministro de agua para toda la provincia de Castellón? ¿se ha previsto la implantación de una red para redistribuir el agua a lo largo de la provincia y un sistema de depósito o de embalse de la misma?
8. Si es esto factible, ¿se podría considerar como parte de la inversión a realizar el coste de las desaladoras?
9. Si por el contrario no lo fuera, ¿se ha contemplado la posibilidad de utilizar este agua en todas las poblaciones de costa donde los acuíferos están salinizados, pudiéndose parar la extracción de agua del subsuelo en estas zonas al menos durante 10 años y resolver las filtraciones de agua salada procedente del mar hacia el interior de la península?
10. Si es así, ¿piensa el Gobierno subvencionar el agua procedente de las desaladoras por la mejora realizada en el ecosistema? ¿En qué cuantía?
11. Si no son factibles estas soluciones, ¿qué solución es la viable para q el precio por litro de agua sea al mismo precio que el actual y no suponga un sobrecoste para el usuario?


María Sandra Julià Julià
Diputada Grupo Parlamentario Ciudadanos